

LA TERRITORIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ASISTENCIALES EN BUENOS AIRES DESPUÉS DE 2001

THE TERRITORIALIZATION OF ASSISTANCE POLICIES IN BUENOS AIRES SINCE 2001

MARÍA CECILIA FERRAUDI CURTO¹

Recibido em: 31/07/2012

Aprovado em: 08/04/2013

RESUMEN

Este artículo se propone explorar los procesos de territorialización vinculados a las políticas públicas orientadas a la “pobreza”, centrándose en la situación argentina posterior a diciembre de 2001. Se atiende especialmente a la relación entre política pública, construcción territorial y tejido organizacional local, a partir de la investigación etnográfica sobre diferentes programas implementados luego de 2001. Para ello, se centra en el Gran Buenos Aires, no sólo por la abundancia de estudios etnográficos en esta zona sino, sobre todo, porque el conurbano bonaerense ha sido un lugar clave para definir la política pública asistencial en las últimas décadas.

Palabras clave: Políticas públicas asistenciales; Buenos Aires; Diciembre de 2001.

ABSTRACT

This paper aims to explore the processes of territorialization connected to the implementation of public policies focused on “poverty”, during the post-2001 Argentine situation. It focuses on the relationship among public policy, territorial construction and local organizational networks, based on the ethnographic research about different programs implemented after December 2001. The analysis is restricted to the Great Buenos Aires area, not just because of the existing ethnographic data but also because the “conurbanobonaerense” [Buenos Aires periphery] has been very important in the definition of these public policies during the last decades.

Keywords: Public policies focused on “poverty”; Buenos Aires; December 2001.

1 Introducción

Este artículo se propone explorar los procesos de territorialización vinculados a las políticas públicas orientadas a la “pobreza”, centrándose en la situación argentina posterior a diciembre de 2001. Me interesa especialmente atender a la relación entre política pública, construcción territorial y tejido organizacional local, a partir de la comparación etnográfica entre diferentes programas implementados luego de 2001. Para ello, me centro en el Gran Buenos Aires, no sólo por la abundancia de estudios etnográficos en esta zona sino, sobre todo, porque el conurbano bonaerense ha sido un lugar clave para definir la política pública asistencial en las últimas décadas.

Entiendo la territorialización de las políticas públicas como una noción que busca dar cuenta de las formas en que dichas políticas se concretan en términos espaciales. Siguiendo la concepción weberiana, el término “territorio” refiere a una definición estatal del espacio como ámbito delimitado dentro del cual el Estado ejerce el monopolio de la violencia física legítima. Se ha señalado que en esta concepción el Estado implica necesariamente centralización. “Solamente el Estado está inherentemente centralizado sobre un territorio delimitado sobre el que tiene poder autoritario. A diferencia de los grupos económicos, ideológicos y militares en la sociedad civil, los recursos de las elites estatales se difunden autoritaria-

¹ Doctora en Ciencias Sociales Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS-IDES), Argentina. Investigadora asistente de CONICET. Docente en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina. E-mail: cferraudi@yahoo.com.

mente hacia fuera desde un centro pero se detienen ante barreras territoriales definidas” (MANN, 2006, p. 19). La centralización distingue el poder estatal de otros tipos de poder. Pero no se debe tomar la centralización estatal como supuesto conceptual sino, más bien, como fenómeno históricamente variable.

Hacia fines del siglo XX, el Estado nacional argentino atravesó un proceso de reforma estructural que, entre otras cuestiones, tendió a su descentralización administrativa. Con respecto a las políticas orientadas a la “pobreza”, específicamente, se implementaron programas focalizados localmente en la población “vulnerable” siguiendo los lineamientos de las agencias transnacionales de crédito (PREVOT-SCHAPIRA, 1996; REPETTO, 2000). Si este proceso puede ser visto como una consecuencia del debilitamiento del Estado (SIDICARO, 2001), los acontecimientos de fines de 2001 abrieron a una revisión de la situación.

Diciembre de 2001 marcó la culminación de un ciclo iniciado luego de la crisis hiperinflacionaria de 1989, cuyos ejes giraban en torno de la convertibilidad monetaria respecto del dólar, la apertura económica y la reforma del Estado (privatización de empresas públicas, descentralización administrativa y focalización de las políticas sociales).² Desde mediados de la década de 1990, los análisis académicos mostraban señales de recesión económica, altos índices de desocupación y desestabilización del empleo (BECCARIA; LÓPEZ, 1997). Estas cuestiones lograron limitada atención pública a partir de una serie de protestas en el interior del país y en el conurbano bonaerense. El Plan Trabajar, que implicaba una transferencia condicionada de ingresos a los jefes de hogar desocupados a cambio de una contraprestación, fue la respuesta estatal frente a los primeros cortes

de ruta de los nominados “piqueteros” (SCRIBANO, 1999). Si inicialmente los análisis mostraban las protestas como acontecimientos episódicos (SCHUSTER; PEREYRA, 2001), posteriormente comenzó a resaltarse su elaboración como parte de una compleja trama social local y procesos organizacionales de más largo plazo (AUYERO, 2004; MERKLEN, 2005; SVAMPA; PEREYRA, 2003). Sin embargo, en el Estado predominaba un enfoque de la cuestión social abstracto y fragmentador (GRASSI, 2003). El alcance de los programas estatales asistenciales era muy reducido. En diciembre de 2001, la situación “estalló”.

Hacia fines de la década, la crisis del Estado se manifestaba claramente como crisis fiscal. Mientras los Estados nacional y provinciales comenzaron a emitir cuasi-monedas para afrontar los pagos pendientes, una medida tendiente a limitar la extracción de depósitos bancarios (“corralito”) exacerbó el malestar reinante. A la vez que los “cacerolazos” se multiplicaban en diferentes ciudades del país, una serie de saqueos se produjo en la periferia de los centros urbanos y, especialmente, en el conurbano bonaerense. La declaración del estado de sitio a las 22 hs. del 19 de diciembre fue respondida con un “cacerolazo” multitudinario en la Plaza de Mayo (frente a la casa de gobierno) al grito de “que se vayan todos”. Los manifestantes fueron reprimidos por la policía. Ante la continuación de las protestas, el 20 de diciembre renunció el presidente Fernando de la Rúa. Días después, fue declarada la cesación de pagos de la deuda pública. En enero de 2002, el presidente provisional Eduardo Duhalde promulgó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Era el fin de la convertibilidad.

La declaración de la “emergencia” fue clave para la redefinición de las políticas públicas orientadas a la “pobreza”. El conurbano fue definido como territorio privilegiado, tanto por su peso

² Los orígenes de la transformación neoliberal en Argentina pueden remontarse a la dictadura de mediados de los '70. Sin embargo, no fue hasta después de la hiperinflación de 1989 que adquirieron amplia legitimidad social.

demográfico como por su centralidad en diferentes formas de acción colectiva contenciosa durante los “tiempos extraordinarios” (SVAMPA, 2005). Aquí, partiré de este contexto para analizar los procesos de territorialización de las políticas públicas asistenciales en el conurbano bonaerense. Este artículo se asienta sobre mi trayectoria de investigación desde 2003, retomando mi experiencia etnográfica para elaborar comparaciones, a la luz de un campo amplio de investigaciones que, a lo largo de la década, han dado cuenta de la relación entre los bienes que el Estado distribuye para aquellos que cataloga como “pobres”, y las prácticas de reclutamiento y movilización de partidos y otras organizaciones.

2 Anotado por el plan

En 2002, la implementación del PJHD significó la masificación de los subsidios a los desocupados. Enmarcado en la “emergencia”, el programa lanzado por Duhalde actualizaba las políticas públicas asistenciales. Por un lado, retomaba algunos elementos de los Planes Trabajar. Se otorgaba un monto monetario fijo (\$150) a los jefes de hogar desocupados con menores a cargo, a cambio de una “contraprestación” laboral en diferentes “proyectos comunitarios y productivos” (y de una serie de requisitos de salud y educación de los menores). La gestión estaba descentralizada: tanto los municipios como diferentes organizaciones sociales (iglesia, ONG y, significativamente, “piqueteros”) operaban como administradores de planes. Por otro lado, la masificación (inicialmente presentada como “universalidad” por el gobierno³) implicaba un cambio sustancial en la vida cotidiana de los barrios populares (CERRUTTI; GRIMSON, 2004, p.

³ La inscripción de nuevos “beneficiarios” en el PJHD se cerró a fines de 2002, dejando fuera de cobertura a una cantidad significativa de hogares que cumplía con los criterios de elegibilidad. Según datos de 2007, esta situación afectaba a aproximadamente 1.800.000 hogares (RINGOLD Y ROFMAN, 2010: p. 36).

43)⁴. Mientras el Plan Trabajar había alcanzado a 206.281 personas en su momento de mayor cobertura (en 1997), el PJHD llegó a extenderse a casi dos millones de beneficiarios en su pico de cobertura a inicios de 2003 (SVAMPA; PEREYRA, 2003, p. 99). Comedores, merenderos, huertas y otras iniciativas se vieron reconfiguradas a partir de los planes: se incorporaron “beneficiarios”, se modificó el sentido atribuido al trabajo allí, se multiplicaron las tareas de gestión (llenado de planillas, recolección de documentos, trámites, etc.) (FASANO, 2004; FERRAUDI CURTO, 2006; QUIRÓS, 2006). Si bien los tejidos organizacionales variaban localmente (CERRUTTI; GRIMSON, 2004), la multiplicación de los agentes mediadores entre el Estado y la población habilitaba diferentes alternativas para los “beneficiarios”, quienes elaboraban complejas evaluaciones entre las organizaciones localmente próximas. Las reglas escritas del programa eran redefinidas en las tramas organizacionales locales y en la forma en que éstas eran apropiadas por quienes transitaban por ellas.

La centralidad de la política pública en la estructuración de los vínculos organizacionales podría verse explicitada en el motivo que muchas personas argüían para acercarse a una u otra organización: “anotarse por el plan”. La relación con la organización se establecía a partir de ese momento en que la persona concurría con su documentación para inscribirse en los “listados”. Según la organización, diferentes requisitos se establecían para merecer el plan (diferenciando según el tiempo que tardaba en “salir”): asistir a movilizaciones, participar en los proyectos comunitarios y productivos, asistir a

⁴ “En Buenos Aires cualquier intento por caracterizar actualmente una organización popular implica al menos tres preguntas inevitables. La primera es: “¿cuántos planes tiene?”. Es decir, cuántas personas realizan en esa organización la contraprestación del Plan Jefes y Jefas de Hogar. Las otras dos preguntas se refieren a cómo se consiguen esos planes y a cómo se los distribuye. En otras palabras, todas las organizaciones populares han sido transformadas por el PJHD o han logrado constituirse en intermediarias entre el Estado y la población gracias al mismo” (CERRUTTI Y GRIMSON, 2004: p. 42-43).

las reuniones, pagar, etc. Pero no todos eran considerados igualmente legítimos. En las organizaciones piqueteras, la obligación de “marchar” era reconocida como válida. Según el discurso oficial de estas organizaciones, los planes se habían “conquistado” en la “lucha”. De allí que la participación en las protestas (entonces ya no cortes de ruta en la periferia sino, sobre todo, marchas por el centro de la ciudad de Buenos Aires) resultaba clave como forma de socialización política de quienes ingresaban en la organización. En las charlas, muchos evocaban cuántos meses habían estado “marchando” antes de que les saliera. A mediados de 2004, sentada en una estación de trenes en Florencio Varela, escuché una conversación entre un hombre y un muchacho.

El hombre estaba acicalado como para salir (un pantalón de vestir y una camisa limpia y planchada). El pibe vestía como otros de la zona: un pantalón de jogging y una remera suelta. Conversaban sobre distintos movimientos piqueteros. El señor dijo que con tres marchas ya daban la mercadería... y cosas lindas. El pibe contestó: “Sí, ¡mi papá traía mermelada!”. “La heladera llena quedaba... Ahora este Castells está mal. Que se muera. Te cobran \$20 para que te saliera antes [el plan] y \$5 por la mercadería. ¿Con \$125 cómo hacés? ¡\$100 los cambiás y ya se te fueron!”.⁵ Llegó el tren y el hombre partió.

Florencio Varela es un distrito del segundo cordón del conurbano bonaerense que se destaca por un crecimiento poblacional reciente, niveles elevados de pobreza y, desde fines de la década de 1990, por la presencia de varias “organizaciones piqueteras” usualmente consideradas como “duras” por los medios de comunicación. Después de meses de trabajo de campo en la zona,

⁵ Castells es el dirigente máximo del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD). Su figura se ha destacado (junto a la de su mujer) por diferentes actos de fuerte impacto mediático. En el momento de esta charla, estaba detenido por la toma de un local de McDonald's y, luego de un prolongado ayuno como medida de protesta, había debido ser internado.

hay algo que llamó poderosamente mi atención: la frecuencia con que la gente habla de estos o aquellos piqueteros en el tren, en la estación, en la calle... Y cómo se refiere a ellos: mercadería, cobros, planes y marchas aparecen como elementos centrales en la valoración y diferenciación entre piqueteros (comparando qué exige y qué da cada uno). Mientras algunos análisis académicos destacan las diferencias “ideológicas” entre organizaciones (SVAMPA; PEREYRA, 2003), otros enfocan hacia las lógicas de individuos y organizaciones como igualmente orientadas a “aprovechar la oportunidad”, multiplicando las pertenencias (MERKLEN, 2005). Ni ideología ni recursos resultan suficientes para dar cuenta de las prácticas. Reconociendo la centralidad de los planes, aquí aparecen varios criterios de valoración diferentes de la “ideología” que implican lo económico pero también lo moral y el gusto. Una forma de sintetizar estas cuestiones consiste en señalar que la gente “se anota por el plan”. De esta manera, se retiene un rasgo esencial, pero a riesgo de olvidar las alternativas y las evaluaciones. Así como las reglas varían entre organizaciones, mostrando cómo actualizan las políticas públicas en su implementación, los “beneficiarios” elaboran criterios propios para fundamentar sus recorridos.

Estas diferencias suponen un campo variado de posibilidades. En Florencio Varela, éstas no sólo implican comparar entre piqueteros. Aquí, la red de organizaciones con mayor número de planes es la de la red municipal, conocida como UGL (Unidades de Gestión Local).⁶ Las UGL son el núcleo de un proyecto municipal que reúne a diferentes organizaciones más o menos ligadas al Partido Justicialista (sociedades de fo-

⁶ De acuerdo a datos municipales de agosto de 2004, la distancia con la cantidad de planes que maneja la UGL frente a la organización piquetera con mayor presencia barrial, es similar a los cálculos a nivel nacional. Con respecto a las organizaciones piqueteras, constaté la presencia del MTR, MTD Evita y MST-Teresa Vive, en Villa Corina. El MTD Anibal Verón (el más numeroso del municipio), el Polo Obrero, la Martín Fierro, el MIJD y el Movimiento 29 de mayo tenían sedes en los barrios lindantes. Para un análisis exhaustivo del mapa de organizaciones piqueteras, véase SVAMPA Y PEREYRA (2003).

mento, clubes, ligas de mujeres, cooperadoras, bibliotecas populares, iglesias) de acuerdo al barrio en que se ubican. Conformadas en 2001 para “facilitar la comunicación del intendente con los vecinos”, incorporaron, a partir del PJHD, la gestión de los beneficiarios.

Como me explicó una de las mujeres en el merendero del MTR (Movimiento Teresa Rodríguez, el más antiguo en la zona), ella había entrado al movimiento con una vecina, que le avisó que estaban “anotando para el plan”. Estuvieron más de seis meses marchando hasta que les salió. Entonces, “mi vecina se pasó a la UGL”. Le pregunté por qué. “Prefería estar más tranquila. En ese tiempo (el año 2002), las marchas eran más, y más duras”, contestó. Ella, de todos modos, se quedó en el movimiento, no porque no temiera algunas marchas (de hecho, tanto entonces como hoy suele faltar a las que se prevén como duras) sino por “todo esto... muchas cosas que hacer, la gente que conocí... es más divertido”.

Este testimonio da cuenta de las alternativas y los criterios para optar, entre ellas: la tranquilidad, la diversión, el miedo a las marchas. Más aún, muestra reglas de funcionamientos del PJHD que diferían entre las organizaciones pero, a la vez, habilitaban el paso entre ellas. Los “piqueteros” y la UGL aparecían así como opciones para quienes habían “conseguido” un plan.

“2001” fue la mayor crisis económica, política y social de la Argentina reciente, hoy recordada como “el quilombo” (PÉREZ, 2009). En este contexto, las políticas públicas asistenciales fueron claves no sólo como fuente de ingreso (ante el 57,2% de la población bajo la línea de pobreza en 2002) sino también para restablecer los vínculos sociales y políticos. Ante la deslegitimación profunda del Estado, la política pública asistencial se concretó a través de una amplia variedad de redes sociales y políticas. Inicialmente

esta cuestión fue vista como un quiebre relativo respecto del “clientelismo” con que diversos investigadores habían caracterizado la política asistencial durante la década de 1990 (SVAMPA; PEREYRA, 2003). Durante los tiempos extraordinarios, se multiplicaron las organizaciones que gestionaban recursos estatales en la periferia de Buenos Aires, mediando entre el Estado y la población. Si bien los “piqueteros” lograron ampliar su presencia pública, concentrando la atención de medios de comunicación y análisis académicos, la amplia mayoría de los planes (aproximadamente el 90%) fue distribuida a través de redes municipales.

3 La reformulación de los planes

A partir de 2003, las políticas públicas asistenciales experimentaron una serie de transformaciones vinculadas al cambio en la estrategia política del gobierno recientemente electo. El gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) buscó reemplazar el PJHD a través de dos vías diferentes. Por un lado, se intentó que los beneficiarios se “traspasaran” a otros programas recientemente creados: el Programa Familias por la Inclusión Social (creado en 2005), que otorgaba un subsidio de acuerdo a la cantidad de hijos a cargo y, a diferencia del PJHD, no exigía “contraprestación” laboral (el monto inicial era de \$150 mensuales a los cuales se sumaba \$25 desde el segundo hijo, hasta un total de seis), y el Seguro de Capacitación y Empleo, un seguro de base no contributiva (\$275) orientado inicialmente a los hombres menores de 30 años inscriptos en el PJHD a cambio de un ciclo de capacitación en oficios de hasta veinticuatro meses de duración. Este cambio se basaba en un análisis de la población que recibía el PJHD, distinguiendo entre dos categorías de acuerdo a sus condiciones de “empleabilidad”: las mujeres (70% del padrón) y los jóvenes (D’AMICO, 2010, p. 34-35). Por otro lado, se lan-

zó una serie de políticas, entre los que se destacaba el Programa Manos a la Obra, destinadas a promocionar emprendimientos productivos (a través de la compra de maquinarias e insumos) desde una concepción que retomaba términos como “economía social” y “desarrollo local” (CROSS; FREYTES FREY, 2009; MASSETTI, 2011).⁷

Así como la masificación de los planes reconfiguró las organizaciones populares en 2002, estas transformaciones posteriores también impactaron sobre las prácticas cotidianas. Como argumenta Pinedo, “la organización de esos emprendimientos implicó un cambio en su dinámica [de la organización piquetera donde realizó trabajo de campo en 2006], pues la gestión de los emprendimientos productivos requería concentrarse en los problemas de división del trabajo, comercialización, distribución de costos y ganancias, demandando una fuerte inversión de energía en el funcionamiento cotidiano y con la consecuente filtración de nuevos conflictos” (2009: p. 83-84). Pinedo analiza cómo estos cambios se concretaron en la distinción entre quienes recibían un “plan” y quienes se ocupaban de gestionar un “productivo”, separando entre los “compañeros del barrio” y los “promotores del movimiento” (2009, p. 81) quienes disponían de los saberes necesarios para la compleja administración de estos emprendimientos (y generalmente no provenían del mismo barrio ni cobraban un “plan”).

Por su parte, las diferentes alternativas que se abrieron a partir del PJHD diversificaron el campo de estrategias individuales respecto de los planes. Como muestra D’Amico, esta situación también reformuló las dinámicas de los “proyectos comunitarios”. Dentro de la copa de leche donde D’Amico realizó su etnografía entre 2008 y 2009, se ha-

bía reducido el número de mujeres que seguía “cumpliendo” con la “contraprestación”. Por un lado, ellas justificaban los cambios a partir de la reformulación de los planes: “el plan familias ese, mató todo. Acá falta gente, cada vez somos menos los que cargamos con todo el trabajo”. (D’AMICO, 2010, p. 69). Por otro lado, D’Amico muestra cómo se solapaban trabajo, domesticidad y sociabilidad barrial concibiendo las tareas ya como “obligación”, como “trabajo” o como “contribución” asociada a los vínculos personales. Como señala Massetti (2011), un cambio importante en las políticas públicas asistenciales estuvo asociado a la puesta en cuestión de la “contraprestación” sobre la cual se sostenían (al menos parcialmente) los tejidos organizativos.

A la vez, estos cambios en las políticas públicas se articulaban dentro de una estrategia gubernamental de “normalización” (SVAMPA, 2005).⁸ Orientada a las organizaciones piqueteras, esta estrategia implicó un intento de integración de las organizaciones más afines dentro de la administración central del Estado mientras los militantes de otras organizaciones se veían frente a un creciente repliegue. Presente en una asamblea de un movimiento de desocupados del sur del conurbano en 2006, Pinedo relata la siguiente intervención de un militante barrial:

“las gestiones se hacen con el movimiento. Pero yo les hago una pregunta, supongamos que me quedo sin leche en el merendero, que a veces suele pasar, y el movimiento no me consigue, porque eso es lo que está pasando. El movimiento no está consiguiendo la suficiente mercadería para los comedores y yo voy a hacer una gestión al municipio, ya no como movimiento, sino como comedor barrial X, y consigo la leche. ¿Eso está bien o está mal?” (PINEDO, 2009, p. 85).

Nuevamente, estas cuestiones se

⁷ Desde 2003, el PJHD redujo su cobertura tanto por la creación de empleo asociada a la reactivación económica como por cierto desplazamiento de los beneficiarios hacia otros programas. Sin embargo, hacia fines de 2007 aún alcanzaba a un total de 800.000 beneficiarios (RINGOLD; ROFMAN, 2008: p. 36). Esta situación se modificaría en 2009, a partir de la Asignación Universal por Hijo.

⁸ En los primeros años del gobierno kirchnerista, el slogan de las campañas de propaganda oficial sostenía: “Por un país en serio”.

materializaban a través de las políticas públicas, y de las vías abiertas (o no) para obtener recursos estatales. Las protestas dejaron de aparecer como efectivas para ampliar los “cupos” de mercadería o planes. Desde el punto de vista de los protagonistas, la reformulación de las políticas públicas se combinó con la deslegitimación asociada a la categoría de “piquetero” y a las “marchas”.

“El tema de los microemprendimientos es para desmovilizar. Eso está claro. Los ‘microentrenamientos’ productivos, les digo yo (...). Y hoy hacés un piquete, todos te putean y el gobierno dice: pero armá el proyecto si querés trabajo genuino... ¿qué trabajo genuino?” (dirigente de la FTV, citado en CROSS; FREYTES FREY, 2009, p. 17).

Ante este panorama, ciertas organizaciones que adherían al imaginario nacional-popular (entre los que se encontraba la FTV) modificaron su estrategia: abandonaron el término “piquetero” para autonominarse, se distanciaron de las modalidades de movilización que habían privilegiado hasta entonces y, basadas en una lectura del discurso kirchnerista como cercano a suideario, se incorporaron a la administración pública (PÉREZ; NATALUCCI, 2010). Como muestra Perelmiter (2009) en su etnografía en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el discurso oficial hacer “subir” a los dirigentes sociales era una forma de hacer “bajar” al Estado nacional al “territorio”.

Así como se multiplicaron los recursos, se diversificaron las políticas públicas orientadas a la “pobreza”. Pero, a diferencia de lo ocurrido inmediatamente después de 2001, los recursos circularon a través de redes más o menos afines al gobierno. Mientras la política pública asistencial tendió a centralizarse, el campo de posibilidades se abrió diferencialmente en términos de la variedad de programas disponibles y del acceso a la administración pública.

4 Ni choripanes ni cortes de ruta

La consolidación del gobierno de Kirchner modificó el campo de posibilidades abierto respecto de las políticas públicas así como las vías de mediación entre los recursos estatales y la población definida como “beneficiaria”. Mientras varios análisis mostraron la reconfiguración de las organizaciones piqueteras dando cuenta de las diferentes lecturas de contexto, las evaluaciones y los cursos de acción emprendidos (PINEDO, 2009; PÉREZY NATALUCCI, 2010; FERRAUDI CURTO, 2011), otras investigaciones se orientaron hacia procesos organizativos que se tejieron en el distanciamiento respecto de “punteros” y “piqueteros” (D’AMICO, 2010; FERRAUDI CURTO, 2010).

“Ninguno de nosotros es un ‘soldado’. Cada uno tiene sus ideas y lo dejamos. Pero todos estamos por el barrio. Nunca nos van a ver con el choripán ni cortando ruta. No lo hicimos antes. Nosotros desde un principio dijimos que queríamos una vivienda digna. Ahí venía lo demás: trabajo, salud... Eso era lo importante”.

Así se presentó José, el dirigente barrial en Villa Torres, La Matanza⁹, cuando llegué al barrio. Su discurso me llamó enseguida la atención por cómo leía el contexto, daba cuenta de la “oportunidad” que marcó su trayectoria de “joven que no entendía nada de política” a dirigente barrial, a medida que la urbanización se consolidaba como proyecto para el barrio y, a la vez, se distinguía de otras alternativas que aparecían como socialmente próximas.

El contraste marcado por José

⁹ Ubicado al sudoeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Matanza es el municipio más extenso del Gran Buenos Aires (325,71 Km² de superficie), y el más populoso. Según el Censo 2001, registra una población de 1.253.921 habitantes (aproximadamente el 9% de la población provincial, y el 3% de la nacional). Según los funcionarios del programa de urbanización de villas y asentamientos municipal, el distrito registra más de cien de estos barrios informales. Entre ellos, Villa Torres es uno de los más antiguos, remontándose sus orígenes a fines de la década de 1950. Ubicado frente a la Ruta Provincial 4, el barrio cuenta con 7.500 habitantes. (Para una definición descriptiva de la villa como forma de hábitat urbano informal, véase CRAVINO, 2006).

en la presentación (y resaltado en el subtítulo) vuelve sobre un debate muy actual entre habitantes de Buenos Aires más o menos interesados en política. Se trata de una discusión que involucra los bienes que el Estado distribuye para aquellos que cataloga como “pobres”, y su relación con las prácticas de reclutamiento y movilización de partidos y otras organizaciones.

José refería a los “choripanes” como los objetos que los políticos distribuyen en los actos, a cambio de la asistencia. Algunos medios de comunicación exponen estos intercambios como ilegítimos. Frente a esta perspectiva, José no negaba asistir a actos sino que sostenían priorizar la urbanización de su barrio. A partir de allí, él explicaba el apoyo al intendente y, a la vez, subrayaban sus prioridades.

Los cortes de ruta, en cambio, constituyen una forma de acción colectiva contenciosa que cobró relevancia en los últimos años de la década de 1990 colocando al problema de la desocupación en un lugar cada vez más central de la agenda pública. Desde el corte de la Ruta 3 en 2000, La Matanza se constituyó en la cuna de las “organizaciones piqueteras” más consolidadas —cuyos orígenes se remontaban a las tomas colectivas de tierra (“asentamientos”) de los ’80- (MERKLEN, 2001; MANZANO, 2007). Llamativamente, la historia de la urbanización en Villa Torres transcurría paralelamente a estos acontecimientos. Originada en una toma colectiva en 1999, en Villa Torres el eje era la urbanización. Mientras aquellas organizaciones tenían a los “planes”, la “mercadería” y luego los “microemprendimientos” (llamados irónicamente “microentretenimientos” por algunos “referentes piqueteros” y por José), la urbanización se constituía como una alternativa diferente: vivienda digna. Al narrar su trayectoria, José refería al contexto posterior a diciembre de 2001 como oportunidad.

“Ese día no me olvido nunca. Alberto [Balestrini, entonces intendente] entra en el estacionamiento y yo justo había ido a Planeamiento. Estoy por entrar pero veo el auto blanco y digo: ‘Ésta es la mía’. Poco más le abro la puerta del auto. ‘¿Cómo está, Alberto? ¿Se acuerda que usted me pidió el prototipo de una casa...?’ Acá se lo traje’. ‘A ver’. Imagínate en ese momento, Matanza era un quilombo. Lo mira: ‘¡Pero esta casa es inmensa!’ ‘Bueno, deme la mitad, por lo menos la mitad’. ‘Bueno, dale’. Es un tipo fenomenal. Como persona. Es un tipo ejecutivo y capo, un tipo común que resuelve. ‘Dale, hablá con tal. Decile que te dije yo’. Yo ya tenía la marca de Balestrini y de ahí empecé”.

Los saqueos son una marca temporal en su relato: diciembre de 2001. Como señalé en la introducción, se trataba de un contexto más amplio de crisis social, económica y política, que precipitó la caída del gobierno de De la Rúa (1999-2001) en el marco de un amplio ciclo de protestas —cacerolazos en diferentes ciudades del país, marchas de ahorristas y piqueteros que concentraban en el centro porteño, cortes de ruta en el interior y saqueos en el conurbano bonaerense (y en otras grandes ciudades). Una de las consignas más difundidas era un llamado contra la denominada clase política: “Que se vayan todos”. Entre todas estas acciones, José resalta la más significativa para su relato: los saqueos como la marca del quilombo. Esto es, una forma clara en que todos percibimos la caída de Alfonsín en 1989... y de Dela Rúa, doce años más tarde.¹⁰

En los relatos de José, 2001 aparece como momento culminante del “quilombo”. Ya no era sólo un problema de La Matanza sino que la situación crítica se había nacionalizado, a la vez que el “conurbano” aparecía como un lugar

¹⁰ Auyero analiza los saqueos ocurridos a fines de 2001. Como epígrafe de la conclusión, retoma unas palabras de la entrevista con Luis D’Elia (dirigente de la FTV): “‘Cuando los funcionarios y los políticos hablan de gobernabilidad (...) están hablando de la capacidad de generar ‘un gran quilombo’ en el conurbano.’” (AUYERO, 2007, p. 193).

clave en la movilización colectiva. El quilombo propició que se multiplicaran los recursos (a través de políticas estatales focalizadas ante lo que los funcionarios definían como “emergencia”). Fuera de la grabación, José duda: “no sé si será porque eran otros con otras ideas o porque no les quedó otra que darnos bolilla a nosotros, a las villas”. Como tantos otros grupos, en 2002 las mujeres de la cooperativa armaron una copa de leche. Planes y mercadería también circularon a través de los diferentes “punteros” del barrio y de los “piqueteros”. Pero esto no era todo.

En 2002, la situación dio un vuelco importante para la cooperativa. El PROMEBBA (Programa Mejoramiento de Barrios) comenzaría a implementarse en el conurbano luego de una ardua negociación de las autoridades nacionales con los funcionarios del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que tomó a la emergencia social como contexto de oportunidad (DI VIRGILIO, 2003, p. 15). Seis proyectos serían incluidos en la prueba piloto. Según José, La Matanza recibiría \$12 millones y Alberto había decidido que Torres fuera el lugar donde bajarán los fondos. “Fíjate cómo lo organizás”, fue lo único que el intendente le dijo a José.

5 Las políticas habitacionales: de la “emergencia” al “Plan Federal”

Una amplia gama de políticas habitacionales se dispuso a partir del gobierno de Néstor Kirchner, apuntando tanto a la situación de “emergencia” social como a la reactivación económica a través del sector de la construcción (RODRÍGUEZ et al., 2007, p. 58). Si la década de 1990 ha sido caracterizada por la ausencia de políticas habitacionales sólidas enmarcada en un proceso de reforma del Estado orientado a la mercantilización (CRAVINO; FERNÁNDEZ WAGNER; VARELA, 2002), la crisis de 2001 abrió a una cierta reformulación de la situación.

Inicialmente, las políticas habitacionales se enmarcaron dentro del Plan de Emergencia Social implementado durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde en 2002. Ante la grave crisis social, económica y política, el gobierno nacional convocó a una “mesa de diálogo social” conformada por miembros de la iglesia católica, de ONG, de sindicatos y de organizaciones piqueteras, para discutir y legitimar una respuesta que tuvo al problema de la desocupación (vinculado a la pobreza) como eje (materializado en la masividad del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados). En dicho contexto, tomó forma el Programa de Emergencia Habitacional (PEH) mientras el PROMEBBA era negociado para aplicarse en el conurbano bonaerense. Ambas iniciativas sólo llegarían a concretarse después de la asunción de Kirchner.

El PEH (también conocido como Techo y Trabajo) sostenía la construcción de viviendas para grupos “vulnerables” a partir de la conformación de cooperativas de trabajo (obligatoriamente integradas por al menos doce receptores de planes, de un total de dieciséis miembros).¹¹ De acuerdo al modelo organizativo que requería, “tendría mejor desempeño donde hay organización social consolidada (con apoyo técnico) capaz de asumir el desarrollo del proyecto” (RODRÍGUEZ et al., 2007, p. 69).

El PROMEBBA (Programa Mejoramiento de Barrios) era un programa financiado (parcialmente) por el BID para “la provisión de infraestructura social, el acceso a la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la organización comunitaria” (DI VIRGILIO, 2003, p. 7). Aunque su diseño inicial databa de 1995 (y era ejecutado desde 1999), su implementación en el conurbano fue posible a través de una trabajosa renegociación que tuvo a la crisis (y el enmarcamiento dentro del Plan

¹¹ Según señalan Rodríguez et al., “el punto de entrada es el ‘eje trabajo’ y se resigna toda definición sobre el habitar, lo cual incluye, primero, los sujetos habitantes y, segundo, la vida cotidiana ‘después de la llave’” (2007: p. 72).

de Emergencia Social) como contexto de oportunidad (DI VIRGILIO, 2003: p. 15). La prueba piloto comprendería sólo seis proyectos dentro del área metropolitana, elaborados por los equipos de los municipios seleccionados a partir de un acuerdo entre funcionarios locales y nacionales. En La Matanza, Villa Torres sería el barrio elegido.

Sostenida en estos antecedentes, la orientación hacia la cuestión habitacional se fortaleció a partir del gobierno de Kirchner. La obra pública aparecía en el centro de una estrategia económica y social tendiente a revertir la crisis. Enmarcada en un discurso de distanciamiento con la “vieja política” (asociada a “los noventa”), la cuestión social fue abordada a partir de la crítica del “asistencialismo” sostenida en su conexión con tres males: el “neoliberalismo” (la primacía de unas reglas de mercado excluyentes y la sospecha del estado asociado al clientelismo y la corrupción), la implementación de “programas enlatados” (basados en concepciones homogéneas derivadas del punto de vista de los organismos internacionales de crédito —y específicamente el Banco Mundial—) y la “estigmatización” de la población (su abordaje en términos de pobreza, tomándolos como beneficiarios). Ante este diagnóstico, las respuestas implementadas por el gobierno de Kirchner fueron diversas —dando lugar a divergencias entre la retórica, las normas y la implementación— (PERELMITER, 2009).¹² La centralidad dada a las políticas habitacionales se inscribió en este contexto. A inicios de 2004, Kirchner anunciaba la implementación del PEH desde un podio en Torres.

A mediados de 2004, sin embargo, el eje pasó a constituirse en torno del Programa Federal de Construcción de Viviendas (aún cuando las políticas previas continuaron vigentes), bajo el ala del Ministerio de Infraestructura y Pla-

nificación Federal de la Nación (a partir de recursos provenientes del superávit fiscal). También orientado a la producción de vivienda nueva para “sectores desprotegidos”, este programa se diferenciaba de Techo y Trabajo (PEH) en un punto importante: las obras estaban a cargo de empresas constructoras. En 2005, este programa concentró el 70% de la inversión en política habitacional dentro del AMBA (RODRÍGUEZ et al, 2007, p. 57). En ese sentido, esta política kirchnerista ha sido comprendida como un “giro recentralizador” (ídem.: p. 56). Dentro de este marco, se articulaban otras políticas de menor alcance: entre ellas, el Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. José, el dirigente barrial que nos recibió en nuestra primera visita, coordina la unidad ejecutora municipal de dicho subprograma desde su implementación en 2005.

6 Unir todas las puntas

La urbanización de Villa Torres es un proyecto municipal de La Matanza que articula diversos programas habitacionales nacionales, provinciales y municipales en la producción de vivienda e infraestructura a fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la villa y regularizar su situación habitacional, estandarizando el tejido urbano local. Si la multiplicación de los programas está asociada a los avatares posteriores a diciembre de 2001, para quienes encabezan la urbanización, los comienzos de la misma se remontan a una toma de tierras realizada por los “jóvenes del barrio” en 1999 (FERRAUDI CURTO, 2010). Debido al trabajo previo (y a las “gestiones” encaradas desde la cooperativa¹³ del barrio), Villa Torres fue seleccionada como lugar privilegiado para la implementación del PROMEBA (Programa de Mejoramiento de Barrios) en La Matanza.

¹² Para un análisis de la redefinición de la cuestión social durante la década de 1990, Acuña, Kessler y Repetto (2002); Armony y Kessler (2004) y Repetto (2000). Para un análisis de las continuidades antes y después de 2001, véase Perelmiter (2007), Soldano (2009).

¹³ La cooperativa se conformó como tal a partir de una política pública nacional (Programa Arraigo) orquestada en 1992 para la regularización dominial.

za en 2002. Otras políticas públicas se sumarían en el “tiempo infinito” entre el proyecto y su concreción: Programa de Emergencia Habitacional, Programa Dignidad, Programa Federal de Construcción de Viviendas, Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Desde 2005, la coordinación del proyecto está a cargo de la unidad ejecutora donde trabaja José.

José: - A partir de la urbanización... yo un poquito era el que unía todas las puntas, el que trabajaba en pos de la unión dentro del barrio. Porque vos veías que todos los dirigentes teníamos la misma necesidad... En un principio yo era el presidente de la cooperativa, que me elegía la asamblea... y a partir de ahí fui siendo representante de todas las organizaciones. Porque al saber que todos teníamos la misma necesidad, yo salía afuera a gestionar para poder resolver el problema de Torres, que es la urbanización (la falta de agua, de cloacas, de vivienda, de escuela, de jardín, de un hospital más grande, de todo lo que es infraestructura).

En principio, la urbanización comprendía la totalidad del barrio. Justificándolo en la “necesidad”, José logró reunir a todo el barrio en torno de la “urbanización” a partir de construir lo que él mismo define como “el problema de Torres” (y su solución), superando las separaciones internas que había traído la toma en 1999 (y consolidándose como dirigente barrial). Más aún, este camino de consolidación no fue ajeno al reconocimiento por parte del intendente ni a la plétora de recursos estatales que diferenciaba la urbanización de las demás políticas públicas vigentes en el barrio. En otros términos, se produjo una concentración de poder dentro del barrio alrededor de José y la cooperativa que contribuyó a que se consolidara como dirigente barrial frente a otros referentes barriales, ya fueran “punteros” o “piqueteros”.

Sin embargo, una vez implementada como política pública, la urbanización implica también distinguir unidades dentro del barrio a fin de efectivizar el derecho a la vivienda. El censo realizado después de la toma en 1999 es considerado como criterio para la delimitación. En términos generales, todas las familias registradas en el censo tienen derecho a una vivienda en el barrio. Esto comprende a los “titulares” y a los “hijos de titular” (o “hijos del barrio”) que hayan conformado “familia” (en la práctica se considera que tengan hijos convivientes registrados en el censo). El proyecto propicia un modelo de familia nuclear, apuntando a quienes tienen casa en el barrio y a su descendencia (no a los inquilinos, que son tomados como población transitoria). Según este registro, “la urbanización de Villa Torres contempla 1.400 derechos”.

A través del censo, el proyecto de urbanización responde a una demanda tal como se orquestó en un momento específico. Pero la propia urbanización involucra una temporalidad en “etapas”, con incertidumbres y esperas diferenciales. Transcurridos los años, se han producido varios cambios en las situaciones habitacionales y familiares de los pobladores. En la práctica, la definición general se actualiza a través de diversos mecanismos: reuniones de manzana, turnos en la unidad ejecutora, firma de acuerdos, quejas, denuncias, ocupación de lotes, compras y cesiones... entre otros. La centralidad de la cooperativa se efectiviza en el registro detallado de estos movimientos, y su control. Imbricada en la trama estatal a través de la unidad ejecutora, la cooperativa hace Estado en Villa Torres, centralizando la gestión de la urbanización. Como liderazgo nuevo surgido en la última década en la implementación de políticas públicas orientadas a la “pobreza”, la figura de José condensa una parte importante de los sentidos de la territorialización de la política después de 2001.

7 Palabras finales

En este artículo busqué mostrar cómo las políticas públicas asistenciales implementadas en Argentina después de 2001 se territorializan de forma variada. Mientras los '90 se habían caracterizado por la descentralización y focalización de las políticas públicas orientadas a la "pobreza", 2001 marcó un quiebre en la situación. En un momento de diversas movilizaciones colectivas en el contexto de una profunda crisis del Estado, las políticas públicas asistenciales ampliaron su alcance, reconfigurando variados tejidos organizacionales. A la vez, las reglas de los programas se vieron actualizadas en la relación entre organizaciones y "beneficiarios", dando lugar a diversos compromisos y dinámicas de politización social. Si bien este proceso dio visibilidad a diferentes actores contenciosos distantes del gobierno, desde los inicios del PJHD, la mayor parte de los recursos circularon por las redes de la administración pública descentralizada. Posteriormente, la situación se orientaría hacia la centralización.

El gobierno de Néstor Kirchner buscó la "normalización" de la situación económica, política y social. A partir de este gobierno, las agencias estatales buscaron centralizar la política pública asistencial mientras se multiplicaron y diversificaron los programas. Este proceso se llevó a cabo de diferentes maneras.

Se orquestaron diferentes mecanismos de integración de las organizaciones más o menos afines en diferentes áreas de la administración estatal central donde sus conocimientos "en terreno" fueron valorados como forma de fortalecer a un Estado que buscaba recobrar legitimidad luego de la crisis y "bajar" hacia la población. A la vez, se buscó reorganizar el PJHD lanzando otros programas orientados hacia poblaciones específicas y modificando las reglas y los criterios de adjudicación. En términos generales, estas políticas,

combinadas con la estigmatización que sufrieron las protestas, tendieron a la desmovilización de los actores contenciosos. Además, abrieron a diferentes estrategias locales orientadas a la captación de recursos. Mientras las políticas de transferencia condicionada de ingresos se orientaron hacia formas cada vez más individualizadas de relación con la población (debilitando las mediaciones organizacionales), otras políticas públicas (como los microemprendimientos productivos y, sobre todo, las políticas de urbanización de villas y asentamientos) se sostuvieron sobre organizaciones locales fuertes que, imbricadas dentro de la administración pública o a través de vínculos estrechos con las mismas, lograron centralizar recursos estatales claves.

Referencias

1. ACUÑA, C.; KESSLER, G.; REPETTO, F. "Evolución de la política social argentina en la década de los 90's: cambios en su lógica, intencionalidad y en el proceso de hacer la política social", Informe CLASPO, University of Texas at Austin, 2002.
2. ARMONY, V.; KESSLER, G. "Imágenes de una sociedad en crisis. Cuestión social, pobreza y desempleo" en Novaro, M. y Palermo, V. (comp.) **La historia reciente. Argentina en democracia**, Buenos Aires, Edhasa, 2004.
3. AUYERO, J. **La Política de los Pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo**, Buenos Aires, Manantial, 2001.
4. _____. **Vidas beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento**, Buenos Aires, UNQ, 2004.
5. BECCARIA, L.; LÓPEZ, N. **Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina**, Buenos Aires, UNICEF/Losada, 1997.

6. CERRUTTI, M.; GRIMSON, A. "Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares", en **Cuadernos del IDES** N° 5, Buenos Aires, 2004. Disponible en: http://www.ides.org.ar/shared/doc/pdf/cuadernos/Cuaderno5_Cerrutti_Grimson.pdf. Extraído en: 04 abr. 2006.
7. CRAVINO, M. C. **Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana**, Los Polvorines, UNGS, 2006.
8. CRAVINO, M. C.; FERNÁNDEZ WAGNER, R.; VARELA, O. "Notas sobre la política habitacional en el AMBA en los '90" en L. Andrenacci (org.), **Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires**, Buenos Aires, UNGS/Ediciones al margen, 2002.
9. CROSS, C.; FREYTES FREY, A. "Políticas sociales como límite y como herramienta: Reflexiones a partir de experiencias de gestión de dirigentes y referentes piqueteros/as en el período 2001-2007" en **Revista El Príncipe**, n. 1, p. 75-98, 2009.
10. D'AMICO, V. "La experiencia y sus múltiples temporalidades. Dinámicas de organización local en torno a planes sociales: una mirada desde la cotidianidad", Tesis de Maestría en Ciencias Sociales IDES-UNGS, Los Polvorines, Argentina, 2010.
11. DI VIRGILIO, M. "¿Existen oportunidades para la creación de valor público durante la implementación de los programas sociales? La implementación del PROMEBA en el Gran Buenos Aires (Argentina, 2002 - 2003)", Taller de elaboración de estudios de caso sobre gerencia social INDES/BID, Washington, octubre (mimeo), 2003.
12. FASANO, P. "«De boca en boca»: Etnografía sobre la productividad social del chisme entre pobres urbanos de Paraná (Entre Ríos)", Tesis de Maestría en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, 2004.
13. FERRAUDI CURTO, M. C. "Mientras tanto: política y modo de vida en una organización piquetera", Tesis de maestría en antropología social IDES-IDAES/UNSAM, Buenos Aires, 2006.
14. _____. "Etnografía de la política en el proceso de urbanización de una villa en el Gran Buenos Aires", Tesis de doctorado en ciencias sociales IDES-UNGS, Buenos Aires, 2010.
15. _____. "Desencuentros en torno de los sentidos de la política: devolución de la tesis en una organización piquetera", en Nueva Antropología, v. 24, n. 75, p. 111-134, 2011.
16. GRASSI, E. **Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal**, Buenos Aires, Espacio, 2003.
17. MANN, M. "El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados" en **Revista académica de Relaciones Internacionales**, n. 5, p. 1-43, 2006.
18. MANZANO, V. "La Matanza: capital del piquete, el peronismo y los movimientos sociales. Configuración socio-espacial y articulación de relaciones políticas", Ponencia presentada al Coloquio de Investigaciones Etnográficas: "Territorialidad y Política" - UNSAM, 23 de septiembre, 2005.
19. MASSETTI, A. "Las tres transformaciones de la política pública asistencial y su relación con las organizaciones sociopolíticas (2003-2009)" en **entramados y perspectivas. Revista de la carrera de sociología**, v. 1, n. 1, p. 9-36, 2011.
20. MERKLEN, D. **Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)**, Buenos Aires, Editorial Gorla, 2005.
21. PERELMITER, L. "¿Quiénes son "vulnerables"? La construcción del destinatario de la asistencia en la Argentina contemporánea", ponencia presentada en las Jornadas del Programa de Investigación PICT-UNSAM "Legitimación

- de las desigualdades en la Argentina reciente”, agosto, 2009.
22. PÉREZ, G. “Genealogía del “quilombo”, una exploración profana sobre algunos significados de 2001”, en PEREYRA, S.; PÉREZ, G. Y SCHUSTER, F. (2009), **La huella piquetera**, La Plata, Editorial Al margen, 2009.
23. PÉREZ, G.; NATALUCCI, A. “La matriz movimientista de acción colectiva en Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista” en **America Latina Hoy**, n. 54, p. 97-112, 2010.
24. PRÉVOT-SCHAPIRA, M. F. “Las políticas de lucha contra la pobreza en la periferia de Buenos Aires, 1984-1994”, **Revista Mexicana de Sociología**, v. 59, n. 2, p. 73- 93, 1996.
25. PINEDO, J. “Hacer lo que, por el momento, otros no pueden hacer: Proyecto militante, prácticas de anclaje territorial, relaciones de interdependencia y noción de compromiso en un Movimiento de Trabajadores Desocupados”, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, UNLP, La Plata, 2009.
26. QUIRÓS, J. **Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires**. Antropofagia, Buenos Aires, 2006.
27. REPETTO, F. “Gestión pública, actores e institucionalidad: las políticas frente a la pobreza en los ’90”, en **Desarrollo Económico**, v. 39, n. 156, p. 597-618, 2000.
28. RINGOLD, D.; ROFMAN, R. “Argentina: políticas de transferencia de ingresos hacia el Bicentenario” en CRUCES, Guillermo et al. **Los programas sociales en Argentina hacia el Bicentenario. Visiones y perspectivas**, Buenos Aires, Banco Mundial, 2008.
29. RODRÍGUEZ, C. et al. “Producción social del hábitat y políticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires: historia con desencuentros”, Documentos de Trabajo N° 49, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA), 2007.
30. SCHUSTER, F.; PEREYRA, S. “La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política”, en GIARRACA et al.: **La protesta social en la Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el interior del país**, Buenos Aires, Alianza, 2001.
31. SCRIBANO, A. “Argentina ‘cortada’: cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste” en M. LÓPEZ MAYA (comp.): **Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste**, Nueva Sociedad, Buenos Aires, 1999.
32. SIDICARO, R. **La crisis del Estado. Y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)**, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2001.
33. SOLDANO, D. “Territorio, asistencia y subjetividad en el Gran Buenos Aires (1990-2004)”, en GONZÁLEZ BOMBAL, M.I.; KESSLER, G. Y SVAMPA, M. (comp.) **Reconfiguraciones del mundo popular: el conurbano bonaerense en la postconvertibilidad**, Los Polvorines, Prometeo/UNGS, 2010.
34. SVAMPA, M.; PEREYRA, S. **Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras**, Buenos Aires, Biblos, 2003.
35. SVAMPA, M. **La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo**, Buenos Aires, Taurus, 2005.